



Foto:AFP

El Departamento de Justicia y más de una docena de abogados generales estatales están exigiendo que S&P desembolse mil millones de dólares para resolver el caso, una pena lo suficientemente grande como para acabar con toda la utilidad operativa de la calificadora durante un año.

S&P, aguerrido en TV; fuera de cuadro quiere hacer las paces

La calificadora, acusada de otorgar notas infladas a inversiones hipotecarias que estimularon la crisis financiera, rechaza los cargos por fraude del Departamento de Justicia; aunque tiene disposición para negociar

Tanto en la televisión como en la sala del tribunal, la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) le ha declarado la guerra a una demanda del Departamento de Justicia.

Pero detrás de las escenas, no quiere nada más que hacer las paces. Después de que S&P emprendiera una campaña desde hace dos años para rechazar los cargos civiles por fraude —presentándolos como represalia por el corte de la calificación crediticia de Estados Unidos— la agencia está negociando resolver el caso con el Departamento de Justicia, según fuentes anónimas que tienen conocimiento del asunto.

Para la firma, que está acusada de otorgar notas crediticias infladas a inversiones hipotecarias que estimularon la crisis financiera, el retraso en llegar a un arreglo puede resultar costoso. El Departamento de Justicia y más de una docena de abogados generales estatales están exigiendo que S&P desembolse mil millones de dólares para resolver el caso, —según las fuentes— una pena lo suficientemente grande como para acabar con toda la utilidad operativa de la calificadora durante un año.

Si capitula ante las demandas financieras del gobierno —y ha señalado en privado la voluntad de hacerlo, de acuerdo con las fuentes— la solución apoyaría la conclusión de que es inútil luchar contra multas de este tipo.

La administración ofreció a la firma pagar casi la misma cantidad, antes de que entablara la demanda, —y ha señalado en privado la voluntad de hacerlo, de acuerdo con las fuentes— la solución apoyaría la conclusión de que es inútil luchar contra multas de este tipo.

de millones de dólares en honorarios legales.

El acuerdo podría quedar listo el primer trimestre de este año, con lo que se pondría fin a un doloroso periodo para la agencia y el sector financiero.

Standard & Poor's, una de las principales agencias que ofrece asesoría a inversionistas, era la única que podía hacer frente a una demanda del Departamento de Justicia y luchar contra el gobierno, mientras que la mayoría de las instituciones de Wall Street, ante la amenaza de una demanda del Departamento de Justicia, hacen un cheque en lugar de acudir a los tribunales.

Tal es el caso de JPMorgan, que acordó pagar 13 mil millones de dólares, mientras que Bank of America desembolsó 16 mil millones.

NOTAS

La firma se comprometió a luchar contra la demanda "vigorosamente" y contrató a cuatro bufetes de abogados.

EVITAN EL ESCARNIO

Esa mentalidad de evitar una pelea en tribunales, y que podría poner nerviosos a los accionistas, le ahorra una empresa la vergüenza de pagar lo mismo o hasta más después de un juicio, en el que un sentimiento antiWall Street agriaría al jurado.

Las instituciones financieras que logran obtener concesiones del gobierno, a menudo persuaden a los fiscales para suavizar una declaración de los hechos que acompaña a un acuerdo o proporcionar inmunidad de otros cargos.

Pese a lo anterior, aún no está claro si S&P, una unidad de McGraw Hill Financial, asegurará concesiones del gobierno; sin embargo, su voluntad para resolver el problema refleja un cambio en el departamento jurídico de McGraw Hill, que ha designado recientemente a una nueva asesora general, Lucy Fato, exsocio de la firma de abogados Davis Polk, quien tiene como objetivo resolver el caso con el Departamento de Justicia,

así como una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) —aunque la calificadora ya ha destinado 60 millones de dólares para pagar la multa de la SEC, que se espera que se anuncie en las próximas semanas.

La estrategia de solución, que puede beneficiar a la compañía en el largo plazo, por la eliminación de algunas de las mayores amenazas que enfrenta, surgió en parte por servir como testigo de otras firmas de Wall Street van a juicio. Bank of America, por ejemplo, luchó un caso de crisis presentado por la oficina del fiscal federal en Manhattan, sólo para perder en el juicio y se impondrá una multa cerca de 1.3 millones de dólares por parte de un juez federal.

Con el fin de maximizar los pagos en efectivo, los fiscales han invocado una ley federal oscura, aprobada hace un cuarto de siglo: la Ley de Reforma, Recuperación y Control de Instituciones Financieras de 1989, que requiere una menor carga de pruebas de cargos criminales y empodera a los fiscales a fijar penas inusualmente grandes.

Para el Departamento de Justicia, que mide el éxito de sus casos de crisis en gran medida por el tamaño de las sanciones pecuniarias, S&P es uno de los pocos asuntos pendientes. Los fiscales están negociando simultáneamente un acuerdo con Morgan Stanley, del que se sospecha vendió títulos hipotecarios emprobleados a los inversionistas en el periodo previo a la crisis.

Pero aun cuando la calificadora inicialmente consideró que la demanda del Departamento de Justicia carecía de "mérito" y se comprometió a luchar contra ella "vigorosamente", contrató a cuatro bufetes de abogados para el caso.

Al igual que en la mayoría de los casos en contra de las grandes corporaciones, la demanda del Departamento de Justicia contra S&P cuenta con una colección de correos electrónicos errantes. Proporcionan un vistazo de la empresa, en vísperas de la crisis de las hipotecas, dando a entender que algunos empleados sabían de un desastre, aun cuando la calificadora proporcionó aprobación a las inversiones de hipotecas exóticas.